

Geopolítica de la transición energética: ¿qué asociaciones UE-ALC?

Policy Brief



groupe d'études
géopolitiques



cries 
Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales

Geopolítica de la transición energética: ¿qué asociaciones UE-ALC?

Policy Brief
Nº especial
GEG(GC)/CRIES/EU-LAC

AUTORES

Felipe Bosch¹

Lianne Guerra Rondón²

Resumen ejecutivo

Este Policy Brief analiza las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) frente a la dimensión geopolítica de la transición energética en un contexto atravesado por la crisis de la COVID-19, las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la multiplicación de catástrofes ligadas al cambio climático. Se analizan los desafíos, oportunidades y contradicciones inherentes a las narrativas e instrumentos de ambos bloques para hacer frente a la transición energética, teatro de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China que ha adquirido una renovada magnitud frente a la “ecología de guerra”

en Europa. Luego de profundizar en la posición de ALC respecto al enfoque de la UE hacia China y el no alineamiento con el eje Washington-Beijing, se aborda el potencial de las asociaciones birregionales en torno a la transición energética, como motor de un renovado proceso de democratización con mayor inclusión social y autonomía estratégica y de una descarbonización necesaria para cumplir con las metas para mitigar el cambio climático. Se finaliza con un conjunto de recomendaciones capaces de dar respuesta a esos desafíos, oportunidades y contradicciones que surgen para desatar el potencial de dichas asociaciones.

1 Felipe Bosch es Lic. en Geografía y Lic. en Economía por la Universidad París I Panthéon Sorbonne, máster en Gobernanza Metropolitana por Sciences Po París y en Estudios Urbanos por El Colegio de México. Es co-fundador y analista del Programa Américas del Groupe d'études géopolitiques (GEG) y editor de la edición en español de su revista, Le Grand Continent.

2 Lianne Guerra Rondón es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente trabaja en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Ha sido asistente de investigación y consultora para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y oficial de proyectos en la Asociación Internacional de Universidades, ONG asociada a la UNESCO. Es analista del Programa Américas del Groupe d'études géopolitiques (GEG) y moderadora del ciclo de seminarios semanales de la edición en español de su revista, Le Grand Continent.

Introducción

A nivel global, los esfuerzos por materializar una transición energética con la que se dejaría atrás los combustibles fósiles afectan no solo el panorama energético, sino también el económico, social, político y geopolítico. Al surgimiento constante de nuevos desafíos, a través de los cuales se trazan nuevas líneas de fractura entre los distintos actores de esta transición, deben ahora sumarse los impactos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Tanto en la Unión Europea (UE) como en América Latina y el Caribe (ALC), los discursos predominantes sobre la transición energética, sin importar que se expresen desde una mirada más radical o que se fundamenten en las posibilidades que otorga el desarrollo productivo verde, se estructuran en torno a una concepción de ésta como motor de un renovado proceso de democratización con mayor inclusión social, mayor autonomía estratégica y de una descarbonización necesaria para cumplir con las metas para mitigar el cambio climático. Si bien el potencial de una transición reflexionada en esos términos es real, así como las posibilidades que abre para un nuevo posicionamiento de las relaciones entre la UE y ALC, la configuración del mundo post-carbono es un espacio de rivalidades estratégicas. El proceso profundamente conflictivo de

desconexión, desarme y desmantelamiento de las infraestructuras de combustibles fósiles, enmarcado ahora por la “ecología de guerra” en Europa, implica cambios en las presiones extractivas, un desplazamiento de las zonas de disputa y, por ende, una modificación de las relaciones de poder entre los actores estratégicos, a decir, entre la UE y ALC.

El objetivo de este Policy Brief es incorporar la dimensión geopolítica al análisis de las relaciones entre la UE y ALC frente a la transición energética. ¿Cómo se expresa y qué impactos concretos tiene para la asociación birregional la dimensión geopolítica de la transición energética? ¿Cómo incorporar dicha dimensión para maximizar el potencial en términos de justicia social, de mayor autonomía estratégica y de cumplimiento de las metas para mitigar el cambio climático? Además de un mayor alineamiento con los objetivos del Acuerdo de París, ¿qué le ofrece a ALC las asociaciones con la UE frente a otras estrategias como la Iniciativa de la Franja y la Ruta china? ¿Qué contradicciones internas y externas se revelan a ambos lados del Atlántico frente a la transición energética y su dimensión geopolítica?

Transición energética: de la lucha sino-estadounidense a la ecología de guerra en Europa

Como viene demostrando Pierre Charbonnier (2021, 2021b), incluso desde antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el mundo post-carbono que parece empezar a estructurarse se encuentra atravesado por la dimensión geopolítica. Esto requiere necesariamente asumir el “giro realista de la ecología política”, no solo en Europa, tal como él defiende, sino también al momento de pensar las asociaciones entre la UE y ALC en torno a la transición energética.

El sorprendente anuncio por parte del Presidente de la República China Xi Jinping, el 22 de septiembre de 2020, del objetivo de lograr la neutralidad de carbono a más tardar en 2060 da por terminadas dos décadas de “política encantadora” cuyo principal legado, el Acuerdo de París, no logra articular una respuesta de peso contra el agravamiento de la crisis climática, a pesar de su significado histórico en términos de afirmaciones normativas. Con el anuncio de la posibilidad e, incluso, la necesidad de implementar una política energética alejada de los combustibles fósiles, apenas unas semanas antes de las elecciones en Estados Unidos, China busca posicionarse al frente de la transición energética articulando una demostración de su poder político en ella, algo hasta ese momento impensado.

Esta demostración se articula en una concepción del desarrollo en la que la integración de las normas ecológicas en el régimen productivo se señala como indispensable. En la Cumbre virtual de Líderes sobre el Clima organizada por Biden el 22 y 23 de abril de 2021, Xi Jinping reafirma el compromiso de neutralidad de carbono para 2060, presenta el concepto de civilización ecológica incluido en la

Constitución de la República Popular China, saluda el regreso de Estados Unidos a la gobernanza climática multilateral y defiende el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Concretamente, las inversiones directas en el extranjero de China en energías renovables (solar, eólica, e hidroeléctrica) han aumentado considerablemente como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

La victoria de Joe Biden se traduce en la articulación y materialización de la apuesta estadounidense por la transición energética, con una referencia histórica al siglo XX, articulado entorno al New Deal y a los esfuerzos de guerra. Esta transición energética, que debe también comprenderse en el marco de un enfrentamiento con la coalición fósil, representada por el poder trumpista, remite a un discurso de unidad nacional y se plantea en términos de sus beneficios tanto para los inversores como para los trabajadores honestos. Algunos elementos del Green New Deal se transforman en ejes estructurantes de la reactivación de la diplomacia económica estadounidense, como vectores esenciales para la relegitimación de un capitalismo ahora responsable, sostenible (Charbonnier, 2021b).

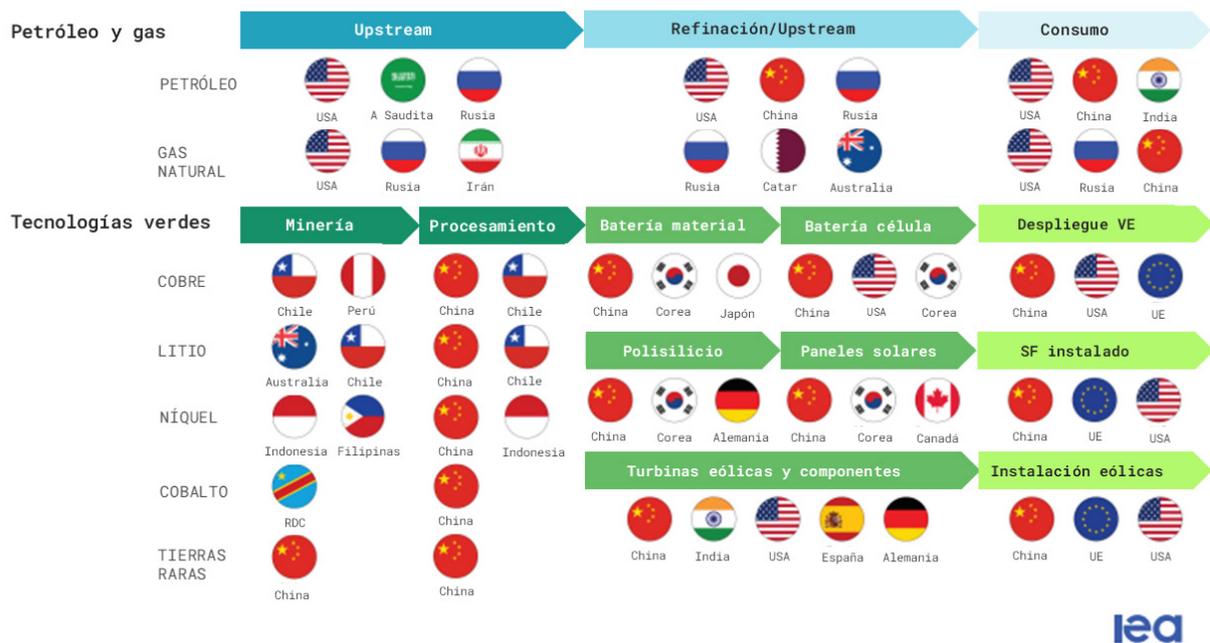
La transición energética se erige en uno de los principales teatros de la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, al estructurar una competencia militar, tecnológica y comercial global, en la que por el momento todo indica una ventaja de la primera sobre el segundo. Si bien sus proyectos expresan varias similitudes -se trata de proyectos de reconducción industrial que no implican necesariamente una redefinición de los esquemas ideológicos y prácticos

de la productividad y del consumo-, las incertidumbres de la apuesta por la transición energética parecen ser mayores para Estados Unidos. A las divergencias al interior de la coalición demócrata en términos de la percepción que se tiene de las posibilidades detrás de la transición energética son considerables, con un ala progresista que deposita en ella la esperanza de una mayor justicia social y racial, se debe sumar el riesgo del resurgimiento de la coalición fósil. Por

otro lado, mientras que China ya ocupa una posición privilegiada y dominante en las cadenas de producción, extracción y suministro de metales, al ser por ejemplo responsable de la refinación del 68% del níquel, 40% del cobre, 59% del litio y 73% de la coba (Castillo y Purdy, 2022), su articulación de los diferentes elementos expresados en los foros internacionales demuestra su preocupación por encarnar un universalismo anti-imperialista.

La transición energética: teatro de rivalidades estratégicas, desplazamiento de las zonas de disputa y modificación de las relaciones de poder

Selección de tecnologías energéticas limpias y cadenas de valor indicativas de petróleo y gas



Los mayores productores y consumidores se señalan en cada caso para proporcionar una indicación, más que una consideración exhaustiva. RDC = República Democrática del Congo; SF = Sistema fotovoltaico; VE = Vehículos eléctricos.

Autor: Felipe Bosch, a partir de Agencia Internacional de Energía
Fuentes: IEA, 2022

¿Y en Europa? Históricamente estructurada en torno a la posibilidad de un renovado movimiento emancipador agotado capaz de reinventar el sentido del progreso y el valor social de la producción, con la reconciliación entre los seres humanos, y entre éstos y la

naturaleza, la ecología europea se ha limitado a una izquierda roji-verde que, en palabras de Charbonnier, ha tendido a invocar ideas pacíficas y valores superiores. Tal como señala Laurence Tubiana (2021), el Pacto Verde europeo, proyecto político creado en el seno

de las instituciones europeas, debe leerse en el marco de movilizaciones ciudadanas, sobre todo entre los más jóvenes, y buenos resultados electorales de esta izquierda roji-verde en diferentes elecciones, ya sean locales, nacionales o europeas.

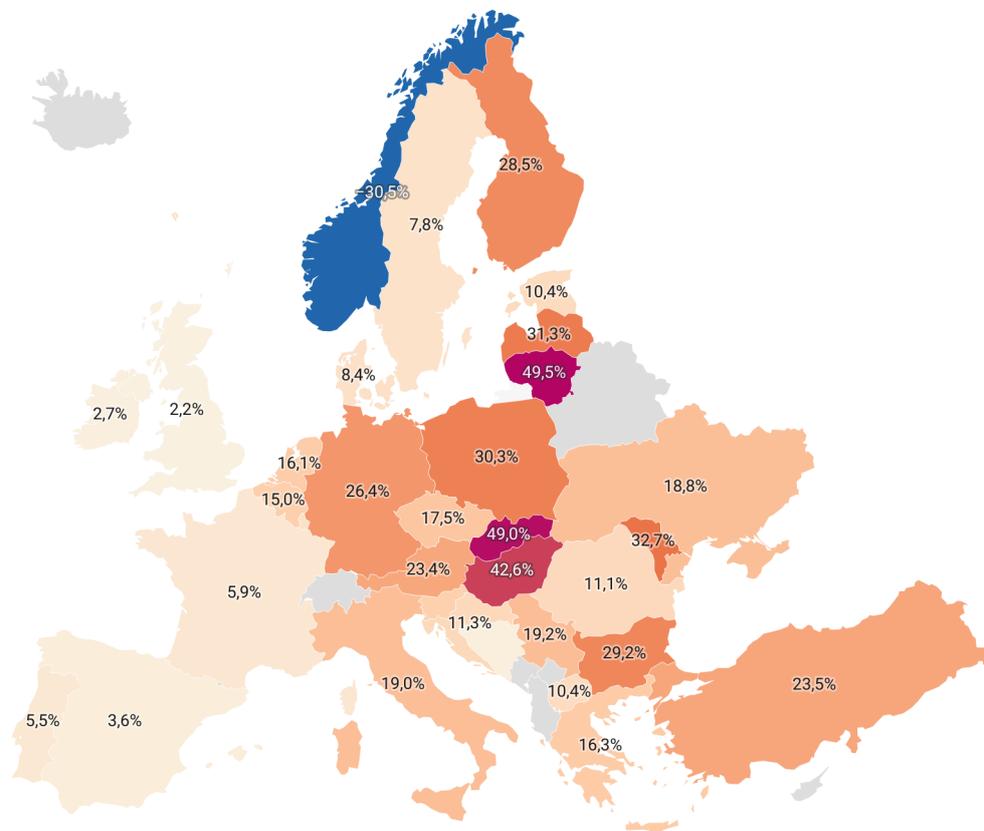
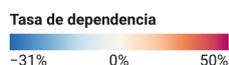
El Pacto Verde europeo se fija un objetivo de convergencia de todas las acciones y políticas de la UE para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y una reducción intermedia de las emisiones de 55% en 2030 con respecto a 1990, y expresa un deseo de proyecto de reconstrucción de los pactos entre el trabajo y el capital en Europa (Sanahuja, 2022), como una estrategia integral y de largo plazo capaz de redefinir el contrato social y saldar además la brecha intergeneracional. Sin ser un proyecto ecosocialista, se aleja del espíritu de conquista de los proyectos de China y Estados Unidos. La diplomacia del Pacto Verde europeo se define sobre la base del objetivo de promover el multilateralismo y el Acuerdo de París que, junto con el paquete de Katowice y la Agenda Mundial de Acción por el Clima, ha constituido la materialización normativa del giro ambiental europeo (Guerra Rondón, 2021), con un compromiso firme con el sistema financiero internacional que apoye el crecimiento sostenible y la utilización de la política comercial como plataforma para el diálogo sobre la acción climática. En el caso de la mitigación, se destaca el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC, CBAM por sus siglas en inglés), que pretende detener la fuga de carbono mediante la aplicación de gravámenes a la importación de bienes caracterizados por procesos productivos contaminantes (acero, aluminio, cemento, hierro, fertilizantes) que provengan

de países sin sistemas de medición, notificación y certificación de las emisiones (Fierro, 2022). El poder normativo de la UE implicaría, a través justamente del CBAM, la consolidación de mercados de carbono en los países socios de la UE.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia acelera la centralidad de estos nuevos acuerdos productivos y distributivos, ampliando la ambición requerida políticamente para la transición energética. Las metas del Pacto Verde en materia de energía convergen con los imperativos de soberanía energética frente a la agresión militar rusa contra uno de sus vecinos; imperativos acentuados por la dependencia de la UE a los combustibles fósiles de Rusia. El cambio hacia la sobriedad energética se transforma en un “arma pacífica de resiliencia y autonomía”, tal como señala el ingeniero especialista en política energética Salomon (2022), y la transición energética se consolida, en palabras del Ministro de Finanzas alemán, como la base de la libertad futura. Con la “ecología de guerra”, la UE redescubre el patrón histórico y político que moldea su base fundacional, es decir, la búsqueda de la paz y promoción de la democracia a través, justamente, de renovados acuerdos productivos y distributivos. Allí se expresaría el “despertar geopolítico de Europa”, tal como ha defendido el Alto Representante de la Unión para la política exterior y de seguridad Josep Borrell (2022), al reflejar una aceleración del proceso de construcción europea sobre la base de una narrativa renovada y la demostración de la relevancia y capacidad material y simbólica de la UE.

Dependencia energética de la UE con Rusia

Para cada país, se expresa la parte de la demanda de energía primaria cubierta directamente por las importaciones netas desde Rusia de gas, petróleo y carbón.



Para minimizar el impacto de la crisis sanitaria, los datos utilizados para las exportaciones e importaciones de petróleo y carbón corresponden a los ofrecidos por Eurostat para 2019. Sin embargo, a raíz de las lagunas de los datos de Eurostat para las exportaciones e importaciones de gas y la escasez de fuentes alternativas fiables, se ha recurrido a los datos de Bruegel para 2021 sobre las cuotas de importaciones de gas ruso. Se insiste entonces en el carácter indicativo de este mapa. La tasa de dependencia corresponde a la relación entre las importaciones rusas y las importaciones totales de los tres insumos, ponderada por el peso relativo de las importaciones netas de esos insumos en el consumo interior bruto que representa la demanda de energía primaria interna de cada país.

Autor: Thomas Belaich/El Grand Continent

Fuentes: Eurostat (2019), Bruegel (2021)

(Des)encuentros UE-ALC y transición energética

Así como la invasión de Ucrania por parte de Rusia se traduce en un reposicionamiento de la UE en el escenario geopolítico internacional, la guerra deja también expuesta una cierta fragilidad en su relacionamiento con los países de ALC que las asociaciones en torno a

la transición energética deben evitar reforzar.

Recordemos que aproximadamente un año y medio luego del primer discurso de Ursula von der Leyen, en el que sostiene la necesidad de la UE de aprender “el lenguaje del poder”,

la entonces Dirección General de Cooperación y Desarrollo (DG DEVCO, por su nombre en inglés: *Development and Cooperation*) se convierte en la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA, por su nombre en inglés: *International Partnerships*), oficializando el objetivo de un cambio de paradigma de una “relación donante-receptor” a una “asociación entre iguales”. En palabras de la Comisaria Jutta Urpilainen (2020), la estructura y sus objetivos fundamentan “una base sólida para contribuir a las ambiciones geopolíticas de esta Comisión”.

Sin embargo, este cambio de narrativa por parte de la UE no ha significado un reposicionamiento de los socios del desarrollo como pares o una apropiación *per se* de los nuevos instrumentos de la cooperación europea. Por el contrario, en algunos casos ha suscitado cuestionamientos sobre el significado de la categoría “socio” y los riesgos que ello comporta en la disminución de los flujos de inversión y de cooperación para el desarrollo. La cuestión de la graduación de los Países de Renta Media aflora como irresuelto si se esboza que asociaciones entre iguales supone niveles similares de desarrollo y que ALC aún se enfrenta a las tres brechas estructurales del desarrollo (bajo crecimiento, desigualdad y destrucción del ambiente) descritas en numerosas ocasiones por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)³. La visión Norte-Sur de la cooperación implícita en la graduación ha dañado, indudablemente, la aspiración a una plataforma de relacionamiento más horizontal. Si bien el instrumento de Vecindad, De-

sarrollo y Cooperación Internacional (NDICI – Global Europe) resuelve de cierta manera esta disyuntiva y permite cooperar con todos los países independientemente de su nivel de desarrollo, el componente político y geopolítico de la relación UE-ALC se encuentra aún ausente.

No sorprende entonces que la UE haya tenido que multiplicar *in extremis* sus esfuerzos diplomáticos para contener la posición de no alineamiento entre los países de ALC en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la propuesta de suspender a Rusia del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos (Pezzini, 2022)⁴. Muestra de los límites de las narrativas dominantes de Occidente en el Sur Global, la votación ha sido en el caso de ALC un reflejo además del tipo de relacionamiento con la UE basado en geometrías variables⁵ en los últimos años. La ausencia de liderazgo regional en ALC, las profundas divergencias políticas intra-bloque y la necesidad de construcción de una alianza estratégica con la UE que no gestione silos temáticos aislados, sino que dialogue con el continente como un todo ha favorecido, entre otros, la profundización de la relación de ALC con China, en la cual pesa más bien un modelo económico y de inversiones que un verdadero diálogo político.

Se expresa una contradicción inherente a este tríptico como consecuencia de la emergencia de la dimensión transpacífica asociada cada vez más al peso sistémico creciente de China y, por ende, a la intensificación de las relaciones entre este país y ALC⁶. Es en este tríptico

³ Para más información, consultar Gaudin, Y y Pareyón Noguez, R. (2020)

⁴ En la última cumbre de parlamentarios euro-latinoamericanos, celebrada en Buenos Aires, la delegación europea no logró que se aprobase una condena a Rusia, a pesar incluso de haber estado planteada en los mismos términos que los aprobados por Naciones Unidas. Ningún país de ALC ha aplicado además sanciones económicas a Rusia.

⁵ Este término se refiere a una interlocución de la UE principalmente con los foros y organizaciones subregionales en función de los distintos objetivos y agendas que ha caracterizado las relaciones UE-ALC en los últimos años. La firma de acuerdos de asociación estratégica tiende a darse de manera bilateral, lo que impacta en el tipo de interregionalismo que se da en la práctica.

⁶ China ha aumentado drásticamente su presencia e influencia en ALC, superando a Estados Unidos como principal socio comercial en muchos países. Su comercio con la región se multiplicó por 26 entre 2000 y 2020 (de 12.000

Estados Unidos/China/UE que las relaciones entre esta última y ALC deben ser reforzadas y renovadas (Guerra Rondón, 2021). Y es que, históricamente, se ha defendido el sustrato sociocultural y el pasado común como fundamento de las relaciones entre la UE y ALC. Justamente dicha relación histórica y, en particular, el pasado colonial, podría explicar que ALC exija mucho más de la relación con la UE que con otros socios del desarrollo. Con China se impone un pragmatismo ejemplificado en el Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Prioritarias CELAC-China (2019-2021), a diferencia de las expectativas de diálogo político que se depositan en la relación con los países europeos.

Frente a las rivalidades que se expresan en un contexto multipolar de fuerte competencia normativa, la respuesta de ALC ha sido optar por una diplomacia de no alineamiento activo que permite el diálogo con todos los actores del sistema sin que ello suponga una ruptura con la comunidad internacional de valores. La neutralidad frente a la rivalidad Washington-Beijing o al enfoque trifásico de la UE con China (cooperación, competencia, rival sistémico) es legítima, pero supone grandes retos, principalmente a nivel democrático. Una diplomacia de nicho permite a ALC construir coaliciones *ad hoc* basadas en los intereses y estrategias nacionales y regionales en aquellas áreas donde se pueda ejercer liderazgo político e influencia internacional teniendo en cuenta las fortalezas de la región.

En cualquier caso, históricamente, los acuerdos UE-ALC han aspirado a ampliar los márgenes de acción de ambos bloques frente a otros actores. En los años ochenta, esto se ha hecho al servicio de la democracia principalmente en América Central y, en los noventa, como respuesta estratégica a la Alternativa de Libre Comercio para las Américas propuesta por Estados Unidos. Desde 2010, la activación de las negociaciones del Acuerdo UE-Mercosur han incluido la variable china como rival que tomaba fuerza paulatina en la región. Si se retoma la propuesta de “asociación entre iguales”, enmarcada en la transición energética, la noción de socio cobra sentido si no invita a un nuevo ciclo extractivista y de economía de enclave en ALC establecido sobre la base de una aproximación Norte-Sur.

La transición energética es uno de esos espacios donde, por expresar diferentes contradicciones, desafíos y oportunidades que se deben indudablemente asumir de un lado y otro del Atlántico, se puede materializar un cambio de paradigma en las relaciones que permita reforzar las asociaciones estratégicas entre la UE y ALC, como socios indispensables en los espacios normativos donde se estructuran los debates del multilateralismo. Se debe reforzar la capacidad de crear redes a distintos niveles para compartir información y experiencias y, si es posible, como plantea Pezzini (2022), “para adquirir una comprensión común de las tendencias y las políticas económicas”, lo que permitiría estructurar el diálogo y engranar una revisión de las narrativas tradicionales teniendo en cuenta la dimensión geopolítica de la transición energética y sus impactos.

millones de dólares a 315.000 millones de dólares), mientras que la UE ha perdido constantemente cuota de mercado. Desde 2017, China ha desplegado su Iniciativa de la Franja y la Ruta, que ahora incluye a 21 países de ALC. Ha logrado además construir una agenda integral China-CELAC ejerciendo una activa diplomacia de las vacunas durante la crisis de la COVID-19, que afectó especialmente a ALC.

Transición energética y dimensión geopolítica: de un lado y otro del Atlántico

Para comprender las posibilidades de consolidar asociaciones fructíferas alrededor de la transición energética, capaces de maximizar su potencial de justicia social, de mayor autonomía estratégica y de cumplimiento de las metas para mitigar el cambio climático, se debe tener en cuenta el impacto que tiene la dimensión geopolítica de la misma tanto para la UE, con una “ecología de guerra” no desprovista de contradicciones internas y externas, como para ALC. En medio de un aparente cambio de ciclo político, entre progresismos de primera y segunda generación, surgen para la región oportunidades y desafíos por aprovechar y superar al momento de dar respuestas a las tres brechas del desarrollo (bajo crecimiento, desigualdad y destrucción del ambiente), con economías que dependen en gran medida de las exportaciones de recursos naturales, y en algunos casos combustibles fósiles, para sostener el crecimiento y la redistribución.

La “ecología de guerra” supone confirmar el ímpetu de la UE hacia las energías renovables, con resultados esperables a mediano plazo, pero también una aceleración del reajuste de proveedores a corto plazo⁷, tal como planteado por el plan REPowerEU, presentado por la Comisión Europea para asegurar en 2027 la soberanía energética con respecto a Rusia. Cabe recordar que, en 2021, alrededor de la mitad del gas importado por la UE, que depende casi exclusivamente

de este (90% de todo el gas consumido), provenía de allí. Este reajuste carga con dos implicaciones geopolíticas de primer orden: por un lado, un refuerzo del vínculo transatlántico en materia energética, que alimenta las interrogantes en las discusiones sobre la “autonomía estratégica” europea frente a su relación con Estados Unidos⁸, y la materialización de asociaciones con Estados con dudosas credenciales democráticas, con el riesgo de una eventual *weaponización* futura de las asociaciones por parte de estos. A dicho reajuste debe sumarse además la integración del gas y de la energía nuclear a la taxonomía verde como actividades de transición que permiten mitigar el cambio climático, luego de que el Parlamento Europeo no alcance en junio la mayoría absoluta para vetar la propuesta de la Comisión.

Reajuste de proveedores e inclusión del gas y de la energía nuclear en la taxonomía verde emiten una señal contradictoria a los socios de la UE, que encuentran allí, ya sea en el marco de una lógica exportadora y/o a través de una referencia al poder normativo de Europa, razones lógicas para fundamentar la inversión en infraestructuras de combustibles fósiles y nucleares. Grandes países como Argentina, México y Venezuela, y otros más pequeños como Trinidad y Tobago, siguen por ejemplo apostando por los combustibles fósiles para sus matrices energéticas y proyectos orientados a la exportación por la

7 Cabe destacar que ningún país de ALC es mencionado en la estrategia internacional del RePowerEU estructurada en torno a la Plataforma Energética de la UE que desempeñará un papel clave para mancomunar la demanda, coordinar el uso de las infraestructuras, negociar con los socios internacionales y prepararse para las compras conjuntas de gas e hidrógeno.

8 Los efectos geopolíticos de la elección de Trump en Estados Unidos habían motivado una concientización por parte de la UE de la necesidad de impulsar una autonomía estratégica (Verdes-Montenegro, 2022). En su entrevista al Grand Continent (2020), el Presidente de la República Francesa Emmanuel Macron, que promovía dicho concepto desde 2017, declaró que “en términos geoestratégicos, nos habíamos olvidado de pensar, porque pensábamos nuestras relaciones geopolíticas a través de la OTAN”. Dichas declaraciones habían generado ciertas disonancias en la pareja franco-alemana.

magnitud de sus reservas. Esta señal se une a las legítimas percepciones en la región del escaso impacto ambiental de sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, que subyace al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Si bien la UE importará gas en el corto plazo, su apuesta por las energías renovables implicará un cese de esas importaciones en el mediano plazo. En cuanto a la energía nuclear, la posición de

muchos Estados miembros y movimientos ambientalistas es muy clara al respecto: la energía nuclear no se puede considerar “verde” porque sus desechos radioactivos, sin importar como sean tratados, se enfrentan a un límite de espacios donde ser almacenados. Su inclusión, sobre la base de un fuerte lobby francés, solo puede comprenderse en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Contextualizando la transición energética en ALC

	Minerales Críticos	Planes de Hidrógeno Verde	Impuesto al Carbono	Exportaciones de Combustibles Fósiles/Bienes Totales	Estrés de Deuda	Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono a Largo Plazo a 2050
Antigua y Barbuda			NO	0%		NO
Argentina	LITIO	PROYECTOS PRESENTADOS	SÍ	3%	15,5%	NO
Bahamas			NO	19%		NO
Barbados		PROYECTOS PRESENTADOS	NO	5%		NO
Belice			NO	2%	22,8%	NO
Bolivia	LITIO, ZINC		NO	21%	34%	NO
Brasil	GRAFITO, NIOBIO, NÍQUEL, SILICIO, MANGANESO	PROYECTOS PRESENTADOS	EN PREPARACIÓN	14%	64,7%	NO
Colombia	COLTAN	PROYECTOS PRESENTADOS	SÍ	46%	37,7%	SÍ
Costa Rica		PROYECTOS PRESENTADOS	NO	0%	23,1%	SÍ
Cuba	COBALTO		NO	0%		NO
Chile	LITIO, COBRE, BORATOS, MOLIBDENO	PROYECTOS PRESENTADOS	SÍ	1%		SÍ
Dominica			NO	0%	50,4%	NO
Ecuador			NO	32%	12,7%	NO
El Salvador			NO	4%	16,8%	NO
Granada			NO	0%		NO
Guatemala			NO	0%	73,5%	SÍ
Guyana			NO	73%	45,2%	NO
Honduras			NO		73,9%	NO
Jamaica			NO	19%	21,8%	NO

México	FLUORITO, ZINC, GRAFITO MOLIBDENO, MANGANESO	PROYECTOS PRESENTADOS	SÍ	6%	42,6%	SÍ
Panamá			NO	0%	8,8%	NO
Paraguay		PROYECTOS PRESENTADOS	NO	15%	46,6%	NO
Perú	COBRE, ZINC, BORATOS, MOLIBDENO		NO	4%	101,7%	NO
República Dominicana			NO	1%	24,4%	NO
Santa Lucía			NO	4%	31,5%	NO
Trinidad y Tobago		PROYECTOS PRESENTADOS	NO	24%		NO
Uruguay		PROYECTOS PRESENTADOS	NO	1%		NO

Países seleccionados de ALC. En la primera columna, se señalan los minerales para los que el país se encuentra entre los mayores 10 productores mundiales

Autor: Federico Sibaja

Fuentes: Últimos datos disponibles del Banco Mundial, BID (2021), IEA (2021)

La necesidad de generar divisas, incluso mediante una apuesta por combustibles fósiles, en una región atravesada por las brechas de bajo crecimiento y de desigualdad, como sostén de un crecimiento indispensable para cualquier política redistributiva, acentuada además en algunos países por la presión de la deuda externa y la necesidad de asegurar estabilidad macroeconómica y/o social a corto plazo, implica varios riesgos. En primer lugar, subyace el riesgo de que las nuevas infraestructuras financiadas se conviertan en activos varados a mediano plazo. La dilatación de las inversiones en energías renovables (y los ecosistemas científico-tecnológicos asociados) implica costos de oportunidad futuros y un riesgo de perpetuación de la subordinación en el orden internacional. Existe por último un riesgo que se fundamenta en una eventual consolidación de la estabilidad y legitimidad de los sistemas políticos en torno a un nuevo

ciclo extractivista, incapaz, tal como se ha demostrado en los últimos años, de cerrar justamente esas brechas estructurales. ALC cuenta con vastos recursos energéticos que hoy se presentan como indispensables para la transición energética: 63% de las reservas de litio a escala global⁹, 33% de las de cobre, 32% de las de níquel y plata cada una (Leañez, 2022; Bárcenas, 2018), y un gran potencial para la producción de hidrógeno verde. Por el momento, la gran mayoría de proyectos está orientado a la exportación.

Por otro lado, los progresismos de segunda generación demuestran que los pactos sociales subyacentes al necesario mantenimiento de los niveles de gobernabilidad de los sistemas políticos latinoamericanos y caribeños se encuentran en mutación, con una evolución de la percepción que tienen los actores sociales de su lugar en estos. Estos dejan de ser simples nodos entre sectores populares

⁹ Chile cuenta con el 50% de las reservas de litio a nivel global. El 63% incluye a Argentina y no considera los recursos del Estado Plurinacional de Bolivia.

e instituciones estatales, guardianes de la redistribución de recursos, para proponer activamente alternativas a los modelos históricos de desarrollo en medio de una participación en los procesos de elaboración e implementación de las políticas públicas. La descolonización, la despatriarcalización y la construcción de relaciones armónicas con la naturaleza, la gran mayoría de las veces interconectadas entre sí, se convierten en demandas que ya no son meramente discursivas, sino sobre las cuales los actores sociales comienzan a estructurar, ya sea a nivel territorial, nacional o regional, un pensamiento bastante avanzado en términos de políticas públicas (Bosch, 2021). Megaproyectos energéticos, incluso aquellos relacionados con tecnologías energéticas limpias, constituyen así un eventual riesgo para la licencia social a mediano plazo.

Los nuevos gobiernos de Gabriel Boric, en Chile, y de Gustavo Petro, en Colombia, son leídos como expresión de estos progresismos de segunda generación en la región. Una de sus principales características diferenciales es la expresión transversal de las problemáticas socioambientales en los programas de gobierno, por sobre una compartimentación de las mismas (Svampa y Viale, 2022). En su primer discurso como Presidente, luego de asumir sus funciones, Boric hace mención explícita a las zonas de sacrificio medioambiental (“nunca más zonas de sacrificio”) y, en particular, las de Quintero-Puchuncaví y Coronel (El Grand Continent, 2021). Estas zonas, identificadas por una serie de activistas y ONGs en Chile, albergan a unos 200.000 chilenos y se caracterizan por una intensa actividad industrial contaminante, particularmente por la actividad de centrales termoeléctricas a carbón. La designación de Maisa Rojas, climatóloga y autora del Sexto Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, como Ministra de Medio Ambiente indica la voluntad de Boric de establecer un

gobierno ecologista capaz de materializar una “transición socioecológica justa” a través de lo que ella denomina una transformación transversal y sistémica (Bosch y Sibaja, 2021).

En Colombia, donde cabe recordar que Gustavo Petro llega al poder en un binomio integrado por Francia Márquez, líder ambiental galardonada con el Goldman Environmental Prize, el “Nobel Verde”, en 2018, el énfasis discursivo en una transición de esa índole es aún más evidente, y se articula además con una serie de demandas que buscan posicionar al país como líder de la agenda climática desde los países en desarrollo. Mientras que en su discurso de victoria Petro señala una necesaria “transición de la vieja economía extractivista, que mata el agua y la vida, a una economía colaborativa en armonía con el ambiente”, en su primera intervención como Presidente menciona el escaso aporte de una transición a una economía sin carbón y sin petróleo de un país como Colombia: “no somos nosotros los que emitimos los gases de efecto invernadero; son los ricos del mundo quienes lo hacen”. Haciendo claramente alusión al incumplimiento de los compromisos del Norte Global en términos de financiación climática (compromiso de movilización de 100.000 millones de dólares estadounidenses de financiación para el clima por año destinados a países en desarrollo), pero también a las dificultades para obtener recursos a través de los impuestos al carbón, Petro da un nuevo impulso a una agenda promovida inicialmente en instancias multilaterales por Argentina, la del canje de deuda por acción climática, cuya pertinencia es también defendida por una considerable cantidad de organizaciones de la sociedad civil y, en el Caribe, por la CEPAL.

Por otra parte, se espera que ante un eventual triunfo del candidato Lula da Silva en los próximos comicios electorales en Brasil se reabran las negociaciones del Acuerdo UE-Mercosur. Dicha renegociación debe

enmarcarse, entre diversas aristas, en la agenda de reindustrialización promovida por Lula frente a un CBAM que suele ser percibido como una medida proteccionista de la industria europea. Según la UNCTAD (2021), Brasil se encuentra entre los 10 socios comerciales de la UE potencialmente más afectados por la medida, con una disminución de sus exportaciones de productos intensivos en energía (hierro y acero) de entre el 1,4 y el 2,7%. Un eventual impulso brasileño al Mercosur, atravesado hoy en día por las discrepancias políticas entre Brasil y Argentina, que se han traducido en una reducción significativa de los intercambios comerciales desde 2019, permitiría consolidar en torno al Acuerdo un espacio de diálogo birregional sobre instrumentos ambientales. De cualquier forma el debate sobre las evaluaciones de impacto del Acuerdo UE-Mercosur se han extendido al aumento real del comercio entre ambos

bloques. El informe Ambec, encargado por el gobierno de Macron, señaló en 2020 que su impacto será mínimo sobre la renta real de los ciudadanos europeos, dado que los sectores productivos que se verán beneficiados son los industriales y los de servicios, en detrimento de los sectores agrícola y ganadero, donde los productos importados favorecerán más a los países Mercosur. El liderazgo brasileño en este ámbito permitiría avanzar hacia la firma de un acuerdo que incluya un instrumento adicional en la vertiente ambiental, con las consecuencias positivas que ello supondría en términos del impacto neto medioambiental. En cualquier caso, el Acuerdo debe profundizar en el impacto de su dimensión geopolítica para avanzar en una triple transición: la productiva, la referida a la renovación del contrato social y la ecológica, hacia la descarbonización y la sostenibilidad (Sanahuja y Rodríguez, 2021).

Pensar en verdaderas asociaciones a través de la transición energética

El debilitado lugar de ALC en el escenario internacional y en los foros internacionales, alimentado por una erosión del proceso de integración regional como consecuencia de las profundas divergencias políticas e ideológicas se expresa en una desarticulada agenda ambiental regional (OCDE *et al.*, forthcoming). En palabras de la Ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, “existen varias agendas climáticas latinoamericanas, [...] no muchos países han entregado su estrategia. Para una buena parte de los países latinoamericanos, la parte de la mitigación no es una prioridad. Este es un continente que, por tener en común un alto nivel de vulnerabilidad, está más bien interesado y ocupado en levantar la agenda de adaptación” (Bosch y Sibaja, 2021). El Caribe ya promueve incluso

una agenda en torno a los daños y perjuicios por cambio climático (*loss and damage*), una agenda que ha adquirido una gran visibilidad internacional luego de las catastróficas consecuencias de las inundaciones en Pakistán a finales de agosto y principios de septiembre.

Si bien esta diversidad de agendas se fundamenta tanto en las diferentes condiciones materiales de cada país como en función de los procesos políticos que están viviendo, la cuestión de la financiación climática, atravesada por la presión de la deuda externa, es transversal a todas ellas y se encuentra entre los elementos estructurantes de lo que se podría denominar por el momento una tímida agenda ambiental regional. Para una región que enfrenta brechas estructurales de desa-

rollo, las posibilidades que ofrece la transición energética, sin importar que se expresen desde una mirada más radical o que se fundamenten ante todo en las posibilidades que otorga el desarrollo productivo verde, requieren de financiación para materializarse. Una asociación sincera y de confianza entre la UE y ALC supone que la primera demuestre activamente que escucha las demandas, percepciones y necesidades de la segunda, incluso aunque parezca difícil considerar algunas de ellas, como por ejemplo la del canje de deuda por acción climática, reconociendo los costos ambientales y el valor de los servicios ambientales de la región.

La cuestión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas plantea también una reflexión en términos de narrativas. Trazando un paralelismo con la pregunta que propone Treyer (2022) al momento de reflexionar en la diplomacia medioambiental entre la UE y África, ¿hasta qué punto existe una brecha entre esta diplomacia medioambiental europea, incluso asociada con la cuestión social, y la realidad más difícil de las desigualdades estructurales a nivel global y dentro de ALC? Tal como señala Zilla (2022), la retórica de “socios naturales” sobre la que se fundamentan las asociaciones entre la UE y ALC, subyacente a la diplomacia medioambiental birregional, sugiere una identidad “que tapa las significativas asimetrías existentes entre ambas, las que condicionan miradas, juicios y acciones diferentes”. Una potencial brecha entre el uso que hace la Comisión Europea o algunos Estados Miembros de algunos elementos del Pacto Verde para consolidar la diplomacia europea y las expectativas que se tiene en ALC sobre la transición se puede lograr únicamente a través de mayor diálogo político. El principal objetivo de dicho diálogo político no debe estructurarse en vistas de contrarrestar a China, sino al servicio de asociaciones estratégicas concretas fundamentadas no tanto sobre la base de “valores comunes”, sino de intereses complementarios.

Frente a una China que se posiciona estratégicamente como garante de la justicia climática y el derecho al desarrollo, en un contexto de desencuentros alimentado por la desconfianza hacia los países del Norte que incumplen con sus promesas de financiación y movilizan sumas impensadas que les permitirá reinvertir su capital tecnocientífico, aumentando así su ventaja y su seguridad, la UE debe reflexionar sobre la manera en que aborda la reestructuración de sus asociaciones con ALC en torno a la transición energética. ¿Cómo, en la visión europea, estas asociaciones pueden dar cabida, además de la soberanía energética y económica de la UE en el futuro, a diversos actores económicos y sociales de ALC, como impulsores de empleo, innovación e industrialización, por un lado, y de recomposición del tejido social y/o nuevas concepciones del desarrollo, por el otro?

Aquí se debe pasar de una primera visión cortoplacista y utilitarista de la asociación vinculada a una posición de ALC como proveedora de recursos para suplir las necesidades de Europa como consecuencia de la guerra de Ucrania, a una de largo plazo que sirva a la diversificación de la matriz energética de las economías latinoamericanas. Este primer impulso es valioso para involucrar a nuevos Estados Miembros de la UE en las asociaciones con ALC, pero no es suficiente para dotar de un verdadero valor a las relaciones interregionales. Pasar a una etapa de planificación a largo plazo de las relaciones en base a la sostenibilidad socioambiental permitiría también consolidar la visión de proyecto de paz e integración del modelo europeo en contraposición a corrientes de pensamiento que le han atribuido una condición netamente militarista a la respuesta ante el conflicto bélico.

La Cumbre UE-CELAC que tendrá lugar en el segundo semestre de 2023 bajo la presidencia española del Consejo de la UE ofrece la posibilidad de establecer un gran hito en la estructuración de un diálogo político de alto nivel para abordar la transición energética como una oportunidad de acercamiento estratégico, por el momento ausente en los diálogos birregionales. Se destaca una serie de desafíos: la transición energética no forma parte de la agenda de la actual presidencia pro-témpore argentina de la CELAC ni ha sido generalmente un elemento estructurador de mecanismos de concertación o integración regionales en ALC, incluida la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Una serie de cuestiones se plantea en el marco del diálogo político: el foco de la cooperación, entre financiación de infraestructuras e inversiones productivas; la transferencia de tecnología en sectores como la energía renovable, con gran presencia de inversionistas europeos, y la electromovilidad, donde hay un interés creciente por las baterías de almacenamiento de energías, a gran escala y en pequeñas y medianas empresas; la sensibilidad a las realidades sociales y culturales de las comunidades locales por parte de empresas europeas (Guzmán, 2022). La propuesta cepalina “Gran Impulso a la Sostenibilidad” resalta la interdependencia de las tres brechas ya mencionadas y busca provocar un punto de inflexión en la vía de desarrollo profundamente extractiva de sus recursos naturales que ha mantenido la región.

En el campo de la financiación de infraestructuras, el *Global Gateway* (Portal Global) constituye el marco de referencia para las asociaciones UE-ALC y la estrategia con la que la UE busca movilizar a través del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible plus (EFSD+) las inversiones europeas en proyectos de infraestructura que cumplan normas medioambientales y laborales de calidad y

la posicionen de manera competitiva frente a otros actores internacionales. Además de la financiación híbrida (*blending*), que ya se utilizaba en la región bajo el *Latin America Investment Facility* (LAIF) y el *Caribbean Investment Facility* (CIF), los anteriores marcos financieros de la UE enmarcados en el *External Investment Plan* (EIP), el EFSD+, integrado al NDICI, permite emplear nuevos instrumentos en la región como las garantías, ya sea en asociación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o, a través de ventanas sectoriales, entre los cuales se encuentran la energía limpia y la electromovilidad, otras instituciones financieras europeas.

Tanto la estructuración de las demandas legítimas desde ALC en torno a la cuestión de la financiación, como una política de cooperación y desarrollo en la UE articulada sobre la premisa de una necesaria canalización de transferencias financieras suponen un riesgo: el de una escasa necesidad del diálogo político, creación de capacidad política y asociaciones para las inversiones (Pezzini, 2021), que muchas veces son incompatibles con las estrategias de desarrollo nacionales. Las inversiones internacionales, ya sean productivas o en términos de infraestructuras, no bastarán, sino que se deberá pasar también por una transformación de los sistemas de finanzas públicas para materializar la transición energética y desatar sus potenciales en ALC.

El *Global Gateway*, que incluye también en su marco a las asistencias técnicas como vehículos para reforzar la calidad de los proyectos y contribuir a la generación de reformas, da espacio para profundizar asociaciones en torno a la cuestión de las finanzas públicas. Es necesario garantizar que la región haga un buen uso de estas herramientas y para ello la capacitación técnica es fundamental, más allá del diálogo político de alto nivel. Los mecanismos de diálogo sobre políticas, como por ejemplo las Mesas País promovidas por la

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), que incorporan a actores públicos, privados y de la sociedad civil tradicionalmente excluidos, se erigen en herramientas indispensables de las asociaciones UE-ALC en torno a la transición energética. Estas Mesas País pueden expresar el apoyo de la UE a nivel nacional a lo que Pezzini (2021) define como una “planificación negociada” capaz de canalizar la multiplicidad de voces e intereses, incluso conflictivos, en una visión y hoja de ruta compartida.

Con las asistencias técnicas surgen también posibilidades para dar respuesta a las tensiones que pueden originarse en torno a proyectos energéticos desde la sociedad civil. Así como el Parlamento Europeo adoptó la “Resolución sobre los efectos del cambio climático en los derechos humanos” en la que pide a la Comisión Europea la puesta en marcha de un programa de apoyo al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú-, se puede asegurar apoyo a diversos procesos de consulta y deliberación en torno a proyectos energéticos, así como a la institucionalidad requerida para aliviar las tensiones sociales. Esta cuestión deberá plantearse particularmente en aquellos proyectos relativos al litio.

De manera general se debe aceptar que el Pacto Verde europeo no puede ser leído como un marco normativo extrapolable a la región, sino como un gran referente de la transversalización de la transición verde. Un apoyo de la UE en materia de transición energética implica necesariamente un apoyo en términos de repensar el Estado de Bienestar en ALC. Tal como ha planteado el ex Ministro de Desarrollo Social de Argentina Daniel Arroyo, existen tres ejes principales que diferencian a la región en materia social del

modelo europeo: el nivel de informalidad laboral (una de cada dos personas ocupadas), la pobreza estructural, que cruza problemáticas relativas a infraestructura y vivienda, trabajo y educación, y la economía social o popular que, si bien encuentra sus raíces en una tradición europea, particularmente francesa, se ha consolidado como categoría analítica en ALC frente al autoempleo y la sobrevivencia (Bosch, 2021). Los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad en la región (nivel de ingresos, género, condición étnico-racial, edad y territorio) plantean una serie de desafíos para una transición energética que, como todos los procesos subyacentes a un nuevo contrato social en la región, necesitan estrategias renovadas de generación de empleo, coherentes e integradas a las agendas de cuidados y de economía popular.

Por último, cabe destacar que la UE puede demostrar su compromiso por un avance de la región en el desarrollo de las cadenas de valor con su apoyo a iniciativas que comienzan a surgir para avanzar en la producción conjunta de litio. En ese sentido, se destaca el caso de la estrategia común de gobernanza en el Triángulo del Litio (Argentina, Bolivia y Chile) para desarrollar la cadena de valor del litio, desde la exploración y explotación hasta la producción de celdas y baterías en serie a baja escala (Lewkowicz, 2022). La Facilidad Regional para el Desarrollo en Transición y sus instrumentos bilaterales, que ha financiado por ejemplo en Chile estudios de preinversión de proyectos de hidrógeno verde, constituye una buena herramienta para ello. Este fondo busca crear instancias de diálogo estratégico que contribuyan a generar nuevas modalidades de cooperación entre ambos socios; seleccionar y realizar acciones innovadoras, con efecto demostrativo, de acuerdo a las prioridades estratégicas de la cooperación birregional y, bilateralmente, con cada país; y sistematizar el proceso de gestión y desarrollo de la nueva agenda para el Desarrollo en Transición, rescatando buenas prácticas y experiencias.

Recomendaciones de políticas

En términos de diálogo político birregional y a nivel multilateral, se recomienda:

- Evitar la sobre-focalización de la relación entre la UE y ALC en temas energéticos a raíz de la urgencia de la ecología de guerra. El nuevo ciclo de asociaciones entre la UE y ALC no debe estructurarse en torno a la mera cuestión energética. Las brechas de desarrollo y las trampas estructurales, amplificadas por la pandemia y por el impacto de la guerra en Ucrania, y la concertación de acciones innovadoras de cooperación deben articular diferentes áreas de diálogo frente a un impulso utilitarista de estructuración de la relación en base a la provisión futura de energía.
- Apoyar las iniciativas regionales de producción de hidrógeno verde a través de los distintos programas de cooperación e inversión de la UE. La región aún carece de tecnologías apropiadas para la producción de hidrógeno verde, por lo que la inversión en capacitación e infraestructura es crucial para garantizar la seguridad energética considerando toda la cadena de valor que supone esta industria.
- Tener en cuenta excepciones para los países con firmes compromisos con el cambio climático en ALC ante la implementación del mecanismo CBAM de la UE para las importaciones. Esta medida debe incentivar que se alcance la neutralidad del carbono sin restringir el intercambio comercial entre ambos bloques.
- Superar el interés concentrado de renovación de la agenda de cooperación a través de la agenda climática, considerando las responsabilidades comunes pero diferenciadas y asumiendo por ende demandas, percepciones y necesidades de ALC, en un contexto socioeconómico de crisis, incluso aunque parezca difícil considerar algunas de ellas, como por ejemplo la del canje de deuda por acción climática.
- Articular una discusión política de alto nivel en torno al carácter estratégico de la transición energética para la asociación birregional. La Cumbre UE-CELAC del segundo semestre de 2023 puede representar un gran hito de dicha articulación, a través de una eventual consolidación de espacios temáticos durante la misma.
- Promover una multilateralización de discusiones como la de la taxonomía verde para impulsar una mayor apropiación, de un lado y otro del Atlántico, de los desafíos, contradicciones y oportunidades que supone la transición energética, su dimensión geopolítica y en materia de financiación climática y sostenible en los sectores público y privado.
- Profundizar en la institucionalización de los espacios regionales latinoamericanos y caribeños para garantizar un mayor equilibrio y simetría en los procesos de negociación de acuerdos ambientales: la UE deberá asumir algunas posiciones a las que se enfrentará en caso de un eventual liderazgo brasileño de una renegociación del Acuerdo de Asociación con el Mercosur.

Garantizar una gobernanza democrática que no genere multiplicación de espacios, sino que aproveche las herramientas existentes a nivel nacional, regional y multilateral.

- Superar la lógica tecnocrática y gradualista del desarrollo, evitando mayores fracturas y procesos de transferencia sin diálogo: la austeridad fiscal no puede constituir una fórmula en *repetitio*, sino que debe aplicarse como medida en aquellos sectores que se verán menos afectados por la transición, y los grupos más vulnerables deben acceder a la transferencia de fondos y a los mecanismos públicos y privados de inversión.

En términos de la cooperación al desarrollo, se recomienda:

- Apoyar las agendas existentes y subyacentes a la transición energética para pensar y abordar desde y para ALC diversas cuestiones en torno al Estado de Bienestar como parte de una reflexión global sobre la transición justa que articule varias dimensiones (verde, digital, social) y sea promovida desde un enfoque multisectorial, multinivel y multiactor.
- Acelerar los esfuerzos para atraer inversión privada mediante medidas directas enmarcadas por el Global Gateway (*blending* y garantías), sin dejar de lado la importancia de áreas de cooperación imprescindibles para financiar una transición justa en torno a las reformas de los sistemas fiscales, con la reorientación del ahorro a la inversión productiva, sacándola de la inversión especulativa, en energías renovables capaz de generar empleo que, a su vez, traiga consigo mayor bienestar social.
- Aprovechar los múltiples instrumentos que ofrece el *Global Gateway* para no solo apalancar inversión privada, sino dar también respuesta a los múltiples desafíos que implica la transición energética para ALC: las asistencias técnicas constituyen una herramienta imprescindible para consolidar diálogos de política pública a escala nacional y afrontar una eventual conflictividad social en torno a proyectos energéticos a escala local.
- Asumir el papel que desempeñan en los sistemas políticos latinoamericanos los actores sociales y reforzar aquellas herramientas que permitan su incorporación en las diferentes acciones de cooperación al desarrollo, ya sea a nivel nacional o local.
- Seguir promoviendo la narrativa sobre “Desarrollo en Transición” a través de procesos de diálogo que permitan mayor apropiación de los instrumentos geográficos y temáticos de cooperación de la UE en ALC. Estos diálogos deben centrarse en soluciones a las brechas del desarrollo en un contexto marcado por la recuperación post-COVID-19 y el actual conflicto en Ucrania. Los diálogos deben ser funcionales y estructurados en torno a cuestiones específicas que, sin sobredimensionar la agenda energética, coadyuven en la transición de una manera cooperativa en ambas regiones.
- Aprovechar la Facilidad Regional para el Desarrollo en Transición y sus instrumentos bilaterales para articular acciones de cooperación innovadoras, como por ejemplo un eventual apoyo a la regionalización de la cadena de valor del litio.

Bibliografía

Bárceñas, A. (2018), **Estado de situación de la minería en América Latina y el Caribe. IX Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas**, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

BID (2021), **Status and trends of compliance and voluntary carbon markets in Latin America**, Washington.

Borrell, J. (2020), **Europa en el interregno: nuestro despertar geopolítico tras Ucrania**, *El Grand Continent*, 24 de marzo.

Bosch, F. (2021), **Las organizaciones sociales como parte de la solución, una conversación con Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de Argentina**, *El Grand Continent*, 03 de febrero.

Bosch, F. (2021), **Compte-rendu: Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018), la fin d'un âge d'or**, *El Grand Continent*, 12 de abril.

Bosch, F. y Sibaja, F. (2022), **Transición y transformación en Chile, una conversación con la nueva ministra Maisa Rojas**, *El Grand Continent*, 03 de febrero.

Castillo, R. y Purdy, C. (2022), **China's Role in Supplying Critical Minerals for the Global Energy Transition. What Could the Future Hold?**, LTRC, julio.

Charbonnier, P. (2021), **El giro realista de la ecología política**, *El Grand Continent*, 29 de abril.

Charbonnier, P. (2021b), **Abrir brecha: la política del mundo post-carbono**, *El Grand Continent*, 14 de junio.

Charbonnier, P. (2022), **El nacimiento de la ecología de guerra**, *El Grand Continent*, 18 de marzo.

El Grand Continent (2020), **La doctrina Macron:**

una conversación con el Presidente francés, 16 de noviembre.

El Grand Continent (2021), **Se abren las alamedas**, 14 de marzo.

Fierro, L. (2022), **Economic Relations between the European Union and Latin America and the Caribbean**, Abril 2022, *Fundación EU-LAC Policy Brief* N° 3.

Gaudin, Y. y Pareyón Noguez, R. (2020), **Brechas estructurales en América Latina y el Caribe: una perspectiva conceptual-metodológica**, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/139; LC/MEX/TS. 2020/36), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Guerra Rondón, L. (2021), **Multilateralismo y Asociación birregional entre la Unión Europea y América Latina y El Caribe**, Septiembre 2021, *Fundación EU-LAC Policy Brief* N° 2.

Guzmán, S. (2022), **“La crisis climática, una oportunidad de verdadera colaboración entre Latinoamérica y la Unión Europea”** en Jeger, E., Durán-Cruz, D. y Luciano, B.-T. (coords.) **Multilateralismo y Regionalismo en tiempos desafiantes: relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe**, Fundación EU-LAC.

IEA (2021), **Hydrogen in Latin America. From near-term opportunities to large-scale deployment**, Agosto 2021.

Lewkowicz, J. (2022), **América Latina discute una estrategia regional para la producción del litio**, *Diálogo Chino*, 16 de agosto.

Leañez, F. (2022), **Intensidad de materiales en la transición energética de América Latina: estimaciones sobre la base de un escenario de integración energética de América del Sur**,

Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/46), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

OCDE *et al.* (forthcoming), **Latin American Economic Outlook 2022: Towards a green and just transition.**

Pezzini, M. (2021), **La era de los revolucionarios sin revoluciones**, *El Grand Continent*, 18 de noviembre.

Pezzini, M. (2022), **Nuevas alianzas para salir del interregno**, *El Grand Continent*, 28 de mayo.

Treyer, S. (2022), **Diplomacia medioambiental: Europa y los nuevos países no alineados**, *El Grand Continent*, 23 de junio.

Tubiana, L. (2021), **El Green Deal es el nuevo contrato social**, *El Grand Continent*, 28 de septiembre.

Salomon, T. (2022), **Tweet del 02 de marzo.**

Sanahuja, J.-A. (2022), **El Pacto Verde, NextGenerationEU y la nueva Europa geopolítica**, Fundación Carolina, Documento de Trabajo 63 / 2022.

Sanahuja, J.-A. y Rodríguez, J.D. (2021), **El acuerdo Mercosur-Unión Europea: escenarios y opciones para la autonomía estratégica, la transformación productiva y la transición social y ecológica**, Fundación Carolina, Análisis Carolina, 20/2021.

Svampa, M. y Viale, E. (2022), **Colombia y la renovación política de las izquierdas**, *Rebelión*, 04 de julio.

UNCTAD (2021), **A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for developing countries.**

Urpilainen, J. (2020), **Geopolitical Commission builds on International Partnerships**, 19 de enero.

Verdes-Montenegro, F.-J. (2022), **La autonomía estratégica europea: ¿en qué lugar queda América Latina?**, Fundación Carolina, Documento de Trabajo 65 / 2022.

El presente documento fue producido por la Fundación EU-LAC en colaboración con la edición en español del Grand Continent, publicación del Groupe d'études géopolitiques, y la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Se trata de uno de los productos de los eventos coorganizados en el marco de la 5ª Convocatoria Anual EU-LAC, que selecciona cada año desde 2018 iniciativas en torno a los temas prioritarios de la relación estratégica entre las dos regiones.

La publicación está basada en las temáticas abordadas durante la Jornada de Estudio homónima coorganizada por las tres instituciones en la Maison de l'Amérique Latine en París en junio del 2022 en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe promovida por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. Los intercambios editorializados se encuentran aquí:

<https://legrandcontinent.eu/es/eventos/geopolitica-de-la-transicion-energetica-que-asociaciones-ue-alc/>

Design: Frances Pont



Groupe d'études géopolitiques, 2022
45 Rue d'Ulm, 75005
París, Francia
<https://geopolitique.eu>
<https://legrandcontinent.eu/es>



Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales

Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, 2022
Lavalle 1619 9º A CP (1048), CABA, Argentina
www.cries.org

El Grand Continent es una revista nueva, fundada en mayo de 2019 en París, en pleno desarrollo y construcción, que constituye el primer proyecto serio capaz de producir una revista escrita en los principales idiomas del debate europeo. La revista es una publicación del Groupe d'études géopolitiques, un centro de investigación independiente con sede en la École normale supérieure de París que produce investigaciones fundamentales basadas en la noción de escala con el objetivo de contribuir a la construcción de una Europa geopolítica.

La Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), fundada en 1982 en Managua, es una red de centros de investigación, organizaciones no-gubernamentales, asociaciones profesionales y fundaciones que promueven la investigación económica y social en América Latina y el Gran Caribe. En 2016 se transformó en think tank regional. Su misión apunta a la profundización de la participación de la sociedad civil en los procesos de integración regional y en la formulación e implementación de políticas públicas, así como en la promoción de un agenda para la integración comercial, social, política y cultural de América Latina y el Gran Caribe.



FUNDACIÓN EU-LAC, 2022
Große Bleichen 35, 20354
Hamburgo, Alemania
<https://eulacfoundation.org/es>

La Fundación EU-LAC es financiada por sus Miembros, y en particular, para esta iniciativa, por la Unión Europea y la República Federal de Alemania. Los conceptos vertidos en el presente documento son responsabilidad únicamente de los autores y no se puede considerar como el punto de vista de las instituciones en las que trabajan ni el de las instituciones co-organizadoras de la Jornada de Estudio, incluida la Fundación EU-LAC, sus Estados Miembros o la Unión Europea.

Esta publicación tiene derechos de autor, pero puede ser reproducida libremente por cualquier medio con fines educativos o para llevar a cabo acciones de promoción, mediación o investigación, siempre y cuando la fuente se cite apropiadamente.

Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar su impacto. Para contactar a la Fundación vía correo electrónico: info@eulacfoundation.org



Federal Foreign Office